

Tribunal Superior de Justicia

de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia
num. 278/2016 de 23 febrero

[JUR\2016\66770](#)



Contratación administrativa.

ECLI: ECLI:ES:TSJCL:2016:949

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso de Apelación 543/2015

Ponente: Ilmo. Sr. D. Felipe Fresneda Plaza

T.S.J.CASTILLA-LEON CON/ADVALLADOLID

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

Sala de lo Contencioso-administrativo de

VALLADOLID

Sección Primera

SENTENCIA: 00278/2016

N56820 - JVA

N.I.G: 47186 33 3 2015 0103780

Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000543 /2015

Sobre: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

De AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Representación: D.ª MARIA ENCINA MARTINEZ RODRIGUEZ

Letrado: D. MANUEL BARRIO ÁLVAREZ

Contra CASLI, S.A.

Representación: D.ª SUSANA MARTINEZ ANTON

Letrado: D. JAVIER SAGUAR ORTEGA

SENTENCIA N.º 278

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

DOÑA ANA MARÍA MARTÍNEZ OLALLA

MAGISTRADOS:

DON FELIPE FRESNEDA PLAZA

DON LUIS MIGUEL BLANCO DOMÍNGUEZ

En Valladolid, a veintitrés de febrero de dos mil dieciséis.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid el rollo de apelación n.º 543/2015, dimanante del recurso contencioso-administrativo n.º 61/2013, procedimiento ordinario del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Núm. Tres de León, interpuesto por el Ayuntamiento de Ponferrada, representado por la Procuradora Sra. Martínez Rodríguez, siendo parte apelada CASLI, S.A., representada por la Procuradora Sra. Martínez Antón, siendo objeto de apelación la sentencia del referido Juzgado de 29 de junio de 2015, y habiéndose seguido el procedimiento previsto para el recurso de apelación en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . La representación procesal de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Núm. Tres de León de fecha de 29 de junio de 2015, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

"Estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por CASLI S.A. contra resolución del Alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, de 9 de octubre de 2013, que acuerda la resolución del contrato y la incautación de la garantía, acto que anulo y dejo sin efecto, por no ser ajustada al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra ella cabe recurso de apelación, que deberá interponerse en el plazo de quince días a partir de su notificación y del cual conocerá la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid.

Para la admisión del recurso habrá de constituirse, acreditándolo ante este juzgado, el "depósito para recurrir", regulado en la DA 15 de la [LOPJ \(RCL 1985, 1578 y 2635 \)](#), introducida por [L.O. 1/2009, de 3 de noviembre \(RCL 2009, 2089 \)](#), complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos, con inclusión del original en el libro de sentencias, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo".

SEGUNDO . Una vez formalizado el recurso fue remitido a la Sala por el Juzgado por escrito de 17 de septiembre de 2015, formándose rollo de apelación que fue registrado con el n.º 543/2015.

TERCERO . Se señaló para votación y fallo el día 17 de febrero de 2016.

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FELIPE FRESNEDA PLAZA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

. El presente recurso de apelación se ha interpuesto frente a sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. Tres de León de fecha de 29 de junio de 2015, la cual estimaba el recurso contencioso Administrativo interpuesto por la ahora apelada CASLI, S.A, frente a acuerdo del Ayuntamiento de Ponferrada de 9 de octubre de 2013, que acuerda la resolución del contrato y la incautación de la garantía del contrato de suministro de una cinta transportadora de esquiadores para la estación de montaña "El Morredero", cuya fabricación fue encargada por CASLI S.A. a TRANSPORTES UNIVERSALES S.A.

La Sentencia apelada llega a la conclusión de que la resolución contractual llevada a cabo por la Administración no se ajusta a derecho, por considerar que el posible incumplimiento contractual de la empresa adjudicataria del contrato no tiene relevancia para ello. Dicha sentencia acota los antecedentes fácticos en que se basa su conclusión estimatoria de la pretensión ejercitada por la contratista actora, fijando los siguientes hechos:

1.- Del examen del expediente administrativo, documental y alegaciones de las partes, resultan los siguientes datos relevantes para la decisión del recurso: con fecha 21 de enero de 2013, el Ayuntamiento de Ponferrada, tras la tramitación y adjudicación de concurso público, suscribió con la adjudicataria, CASLI S.A., contrato de suministro de una cinta transportadora de esquiadores para la estación de montaña 'El Morredero', cuya fabricación fue encargada por CASLI S.A. a TRANSPORTES UNIVERSALES S.A. De acuerdo con el Pliego, "el plazo de entrega de la máquina completa, con sus accesorios, objeto del presente suministro será de dos meses. Se computará dicho plazo a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la adjudicación definitiva por el adjudicatario, o el plazo máximo fijado por el concursante en su oferta, si éste fuera inferior a dos meses". Con fecha 25 de febrero de 2013, se presentó en el Registro General del Ayuntamiento de Ponferrada una Moción de Censura contra el Alcalde, que fue debatida y votada el 8 marzo de 2013, proclamándose nuevo Alcalde. Mediante Decreto municipal, de 4 de junio de 2013, se acordó iniciar expediente de resolución del contrato de suministro, decisión notificada a la contratista, que presentó alegaciones (ff. 43 a 46)"......

La expresada sentencia acota el tema debatido en los siguientes términos:

"2.- La cuestión controvertida se puede sintetizar así: la actora alega que, una vez fabricada la cinta transportadora de esquiadores objeto de adjudicación, y preparada para su entrega al Ayuntamiento de Ponferrada, tanto el entonces Alcalde, Artemio , como la propia estación de montaña, solicitaron verbalmente de CASLI S.A. que retuviera la mercancía hasta que se lo indicasen, accediendo CASLI S.A. a almacenarla, conservarla y custodiarla, hasta que se requiriese su entrega. El Ayuntamiento, por su parte, se limita a indicar que el plazo de ejecución venció sin que se produjera la entrega, por lo que procede la resolución del contrato. La resolución del contrato se configura en el [art. 210 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público (TRLCSPP), como una de las prerrogativas con las que cuenta la Administración, estableciendo el art. 211 el procedimiento general para su ejercicio. Entre las causas generales de resolución de los contratos administrativos, se encuentra, por lo que interesa a este proceso, "la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista" (art. 223 d) TRLCSPP), puesto que -a tenor de los arts. 212 y 213TRLCSPP- el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva".

Y añade:

"Entre las causas generales de resolución de los contratos administrativos, se encuentra, por lo que interesa a este proceso, "la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista" (art. 223 d) TRLCSPP), puesto que -a tenor de los arts. 212 y 213TRLCSPP- el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración"....

Ahora bien, la propia sentencia razona sobre la transcendencia de los incumplimientos contractuales y reputa que las meras transgresiones de los plazos de cumplimiento de los contratos no conllevan ineludiblemente como consecuencia a la resolución del contrato, razonando al efecto lo siguiente:

"Reiterada doctrina jurisprudencial (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1999) y del Consejo de Estado, referidas al concepto de "incumplimiento esencial", se pronuncia en el sentido de que no basta cualquier incumplimiento contractual para que se produzca el efecto resolutorio, sino que ha de traducirse en una valoración del incumplimiento grave y de naturaleza sustancial del contrato, al ser la resolución la consecuencia más grave que puede derivarse de esta circunstancia. La apreciación de la demora en el cumplimiento de los plazos como causa resolutoria ha de hacerse ponderando en cada caso concreto las circunstancias concurrentes y afectantes al interés público, sin que proceda aquélla de modo automático. Así lo ha expresado el Tribunal Supremo en su jurisprudencia (recogida, entre otras, en las Sentencias de 14 de diciembre de 2001 , [STS 9850/2001], y de 14 de junio de 2002 , [STS 4346/2002] en las que se examinan supuestos

en los que se ha incumplido el plazo final de ejecución) conforme a la cual "la mera constatación del vencimiento del plazo contractual sin que el contratista haya cumplido satisfactoriamente sus obligaciones no determina, por sí misma e indefectiblemente, la resolución del contrato, pues habrá que ponderar, en relación a las circunstancias del caso, si el incumplimiento es de tanta trascendencia que justifica la resolución y nueva apertura del procedimiento de selección de contratistas".

Finalmente, analizando los hechos específicamente acontecidos en el procedimiento, llega a la conclusión de que el posible incumplimiento de la contratista no tiene relevancia para justificar la resolución y ello, citando el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León recaído en el procedimiento, en base a las siguientes consideraciones:

"no puede sino considerar que se ha producido un incumplimiento contractual, aunque recordando al Ayuntamiento que "la resolución es la consecuencia más grave que puede derivarse de un incumplimiento contractual y que al ser el objeto del contrato el suministro de una cinta transportadora de esquiadores para una estación de esquí, dadas las fechas en que se tramita el presente procedimiento, unido al hecho de que la empresa manifiesta tenerla lista para su entrega, se valore la posibilidad de recibir ésta, aun fuera del plazo señalado, e incluso con la penalidades que en su caso corresponderían solución está que el Consejo tan solo puede sugerir por desconocer la concretas consecuencias que pudieran derivarse y las circunstancias en que se desarrolla el acondicionamiento de la estación de esquí". Pues bien, la prueba practicada en este proceso, fundamentalmente testifical, no avala la terminante decisión adoptada por el Ayuntamiento".

Entre dicha aprueba alude al testimonio del presidente de la Asociación de Amigos del Morredero y el fabricante de la máquina, expresando al respecto lo siguiente:

... "no ocurre lo mismo con el testimonio del presidente de la Asociación de Amigos del Morredero, según el cual, que cita conversaciones con la Concejala, la entrega "no corría prisa" puesto que la estación no se iba abrir todavía, "la cinta iba a llegar a Ponferrada y todavía no se iba a poder montar", y "a día de hoy está sin abrir" (la prueba testifical se practica el 29 de octubre de 2014). Por otra parte, el fabricante de la máquina declara asimismo que estaba terminada en el tiempo previsto. Igualmente sorprende, por mucho que no se requiera intimación para constituir en mora al contratista (art. 212.3TRLCS), la inexistencia de comunicación alguna entre la Administración y aquel".

Coherentemente con las expresadas premisas fácticas y jurídicas la sentencia llega a la siguiente conclusión:

"Todo ello conduce a no estimar probado que exista incumplimiento culpable, pero es que, además, la opción que la ley establece entre resolución o imposición de penalidades, se decide en el propio contrato (Memoria de Prescripciones Técnicas, f. 6) que, al ocuparse del "PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA", dice que "el plazo de entrega de la máquina completa, con sus accesorios, objeto del presente suministro será de dos meses. Se computará dicho plazo a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la adjudicación definitiva por el adjudicatario, o el plazo máximo fijado por el concursante en su oferta, si éste fuera inferior a dos meses", añadiendo que "finalizado el plazo máximo de entrega, sin haberse realizado el suministro, se aplicarán las penalizaciones previstas en el correspondiente Pliego de Condiciones". Por tanto, no consideramos que se haya acreditado debidamente la existencia de incumplimiento culpable por parte del contratista y, en cualquier caso, dicho incumplimiento tampoco habría permitido, de acuerdo con el propio contrato, la resolución automática que ha acordado la actora. Procede en consecuencia la estimación del recurso, que ha de ser parcial".

SEGUNDO

Frente a los razonamientos de la sentencia apelada el recurso de apelación se limita a expresar, lo que es un tema sustancialmente de valoración de la prueba, que el incumplimiento realizado por el contratista, no entregando la cinta transportadora en el plazo convenido, ha de reputarse como un incumplimiento sustancial, que legitima la resolución del contrato que fue acordada en el acuerdo recurrido.

Sobre esta cuestión ha de decirse que lo atinente a la valoración de la prueba, como se decía en la

[sentencia de la Sala de 26 de mayo de 2008 \(PROV 2008. 363521 \)](#) , recaída en el recurso de apelación 465/2007 , corresponde "prima facie" al Juzgador de instancia, debiendo estarse a lo que el mismo razona al respecto, salvo que se acredite error en dicha valoración. Dicha sentencia se expresa en los siguientes términos:

" en lo que ahora interesa, si en el recurso de apelación se cuestiona la valoración de la prueba hecha en instancia, es de recordar que la sentencia de esta Sala de lo Contencioso Administrativo, de 30 de abril de 2004 , ya advertía que cuando el motivo que se plantea en un recurso de apelación es el error en la valoración de la prueba ha de prevalecer la apreciación realizada en la instancia, salvo en aquellos casos en los que se revele de forma clara y palmaria que el órgano "a quo" ha incurrido en error al efectuar tal operación, o cuando existan razones suficientes para considerar que la valoración de la prueba contradice las reglas de la sana crítica. Realmente este no es un criterio exclusivo de ambas Salas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sino un consolidado criterio jurisprudencial".

En análogos términos se expresaban las sentencias de 19 de septiembre de 2014, rollo de apelación 84/2014 y la de 9 de octubre de 2014, apelación 117/2014 .

De conformidad con ello se ha de decir que en el presente caso la sentencia apelada efectúa una muy razonada valoración de la prueba que se practicó en el procedimiento de primera instancia, a cuyos razonamientos consecuentemente se deberá estar, al no poder prevalecer frente a los mismos la subjetiva valoración -no demostrativa de error alguno- que se efectúa en dicho recurso de apelación.

Por lo demás, ha de entenderse que este criterio valorativo de la prueba se comparte por la Sala, pues en atención a los hechos relatados ha de entenderse que efectivamente no se encuentra acreditado que la contratista fuera "per se" la única responsable de la falta de entrega de la cinta, sino que la demora en la entrega fue al menos tácitamente aceptada por el Ayuntamiento.

TERCERO

. De las precedentes consideraciones se ha de desprender ineludiblemente que la consecuencia resolutoria del contrato que se estableció en el acuerdo impugnado en el procedimiento de instancia no es ajustada a Derecho, por cuanto, de un lado, no se encuentra acreditado que exista un incumplimiento culpable imputable al contratista, y, por otra parte, aún supuesto el mismo, nunca tendría relevancia resolutoria del contrato y ello reiterando los propios argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo, que es citada por la sentencia apelada, de 14 de diciembre de 2001 , en la que se expresa que no toda transgresión del plazo contractual puede dar lugar a la resolución del contrato.

Por todo ello, ha de desestimarse el recurso de apelación, debiendo estarse a lo establecido en la sentencia apelada sobre estimación parcial del recurso contencioso-administrativo interpuesto.

CUARTO

. En cuanto a las costas de esta segunda instancia, de conformidad con el [artículo 139.2 de la LJCA \(RCL 1998. 1741 \)](#) , desestimado el recurso de apelación, procede su imposición a la parte apelante, debiendo estarse respecto a las de primera instancia a lo acordado en la sentencia apelada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuestos frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso- administrativo Núm. Tres de León de fecha de 29 de junio de 2015 , debiendo estarse a la parte dispositiva de dicha sentencia en cuanto a la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo interpuesto, todo ello con imposición de las costas de esta segunda instancia a la parte apelante, debiendo estarse en cuanto a las de la primera a lo acordado en la sentencia apelada.

Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa, en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.